

## LO PERSONAL ES HISTÓRICO Y LO HISTÓRICO ES PERSONAL:

arqueología emocional de una vida en barrio o las  
razones para ser un investigador de la memoria

*“Cuando el yo procura dar cuenta de sí mismo,  
puede comenzar consigo, pero comprobará que ese sí mismo  
ya está implicado en una temporalidad social  
que excede sus propias capacidades narrativas [...].  
La razón de ello es que el yo no tiene una historia propia  
que no sea también la historia de una relación  
—o un conjunto de relaciones— [...].”*

JUDITH BUTLER,  
*Dar cuenta de sí mismo. Violencia, ética y responsabilidad.*

### DINÁMICAS DE FAMILIA Y BARRIO

Para el año de 1971 mi padre tenía 33 años y trabajaba en las oficinas de la Aduana de Medellín. Cuando ya tenía edad de escuchar relatos, en susurros, esto me contaba mi madre, un día de tantos en que cosía ropas para las vecinas, mientras lentamente iba perdiendo la vista. Además, me confesaba que él había salido muy pronto de dicho trabajo porque le pidieron participar de *los cruces y corruptelas* que tenían algunos miembros de la Aduana; así que renunció; y en su silencio mi padre sentía un profundo orgullo por haber tomado esta decisión.

Mi padre, aunque siempre ha sabido guardar silencio, nunca aceptó participar del tipo de transgresiones a la norma que requería el tráfico de influencias y riquezas en la ciudad. Fue así como, con el apoyo de su tío, el abogado Lino Acevedo, ensayó la máquina de escribir y se presentó a trabajar como secretario de Inspección

de Permanencia<sup>1</sup>. En sendos turnos de doce horas, pasaba noches enteras en la recepción y recolección de todas las tragedias humanas, técnicas y naturales; hacía la anamnesis de los déritos de violencia, miseria y hambre de la ciudad.

Con menos que un bachillerato de educación aprendió con propiedad el manejo del artefacto para escribir, lo cual le permitió desempeñarse en ese puesto —quizás uno de los trabajos de oficina más duros en el espectro de los empleos formales—. Todos los días recibía, junto con sus compañeros, quejas por agresiones intrafamiliares, conflictos de violencia entre vecinos, capturas de ladrones y levantamiento de occisos por armas blancas<sup>2</sup> y de fuego, que junto con los accidentes de tránsito hacían parte del repertorio de registros que a diario realizaba en su aparato de teclas sobre papel blanco con copia en papel negro de carbón, indispensable para los procesos y diligencias de las autoridades.

Por curiosidad infantil no pude dejar de acompañarlo en algunas oportunidades al trabajo y allí ver, pero en especial, escuchar, lo que narraban las señoras golpeadas por sus maridos, o ver el silencio perplejo de las madres que cargaban en pequeños ataúdes a sus bebés muertos por el hambre. Medellín no era, para finales de los setenta, lo que sería en los ochenta y noventa: el centro urbano con la mayor infraestructura de servicios públicos y la ciudad con la más alta conflictividad social del país, por el acaecimiento en sus barriadas de los conexos fenómenos del narcotráfico, la guerrilla urbana, el paramilitarismo y la corrupción de los cuerpos de seguridad del Estado; problemas que se descargaron en un ritual de asesinato y sacrificio, encarnado en su chivo expiatorio por excelencia: el sicario<sup>3</sup>.

Quizás, para muchos, la de mi padre fuera una especie de práctica intelectual<sup>4</sup> menor; un estrato laboral sobre el que se apoyaban los peritajes, las indagatorias y la búsqueda de pruebas de los expertos: abogados y jueces. Pero sabemos que hasta hoy no solo deben permanecer ocultos la labor y el saber

<sup>1</sup> Entidad municipal que desde los años setenta recibía y registraba los casos de crímenes y delincuencia en Medellín.

<sup>2</sup> Machetes, navajas, puñales, destornilladores, latas afiladas...

<sup>3</sup> Fenómeno de violencia en el que muchos jóvenes son verdugos de la población, convirtiendo esto en su actividad económica fundamental.

<sup>4</sup> En un conocido artículo, Daniel Mato critica la reducción de las prácticas intelectuales al academicismo: "El caso es que esta tendencia 'academicista' de la academia no solo deslegitima intelectualmente las prácticas intelectuales extra académicas, sino que en el mismo acto deslegitima socialmente las prácticas académicas. Y el caso es también que de este modo las universidades cada vez se distancian más de las sociedades a las cuales se supone deberían 'servir'". Ver Daniel Mato, compilador, *Estudios y otras prácticas intelectuales latinoamericanas en cultura y poder*. Caracas: Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), 2002. Disponible en <http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/cultura/mato.doc>

de los secretarios, su memoria<sup>5</sup> y su estrato intelectual, sino que también debe estar oculto su *poder*.

Pareciera que su invisibilidad y silencio desde entonces fueran compensados con un salario que les permitía vivir de una manera decorosa, para sostener a sus familias en los barrios del tercer estrato socioeconómico<sup>6</sup> de la ciudad. Al parecer mi padre reconoció muy bien su condición social, y la aceptó sin queja o reclamo alguno. En el mapa de las clasificaciones, para los estratos 1 y 2, nosotros, los del 3, éramos *acomodados* (este era el término que usaban las personas de otros estratos socioeconómicos para referirse a quienes podían acceder a los servicios básicos de vivienda, salud, alimentación y educación, pero no por ello necesariamente al disfrute ocioso de autos o fincas). Éramos descritos con una palabra que ya hoy, en el año 2010, probablemente entró en desuso, por causa del menoscabo de las garantías laborales básicas para la población en general.

Los dos primeros años de mi vida los viví en el barrio El Salvador, cerca del centro de la ciudad, pero mis padres quisieron vivir después en Belén, del que decían que era un barrio con buenas proyecciones en el uso de medios de transporte y servicios públicos. Dicho barrio empezó a acrecentar aceleradamente su población en la década del cincuenta, y entre la década del setenta y la última del siglo xx casi duplicó su población hasta alcanzar aproximadamente 160.000 habitantes en el 2005. En sus límites con el barrio Guayabal y el barrio Trinidad, conocido popularmente como el barrio Antioquia, se construyó el primer aeropuerto para la ciudad.

Con este proceso de progreso acelerado llegaron al barrio paulatinamente diversas instituciones de los programas de seguridad del Estado: en los años setenta aparece la Inspección de Permanencia, para quejas, demandas y conflictos ciudadanos, situada cerca del parque principal de Belén, y el cuerpo de gerencia de

<sup>5</sup> Foucault, en *La verdad y las formas jurídicas*, se refiere al lugar de los esclavos en la producción de la verdad. En el caso de Edipo, los esclavos poseían un saber, una de las mitades que permitía armar y completar el signo de la verdad sobre el destino del rey. El saber popular guardado en silencio, que posteriormente se ha definido como saber subalternizado, cumple una función determinante en la producción de verdad. Ver Michael Foucault, *La verdad y las formas jurídicas*. España: Gedisa, 1997.

<sup>6</sup> Colombia no es un país definido por castas, sino una sociedad estratificada y clasificada económicamente: los estratos 1 y 2 corresponden a la clase baja, el tercer estrato a la clase media baja, el cuarto a la media, y el quinto y sexto a las clases altas de las ciudades. Medellín, por medio del sistema unificado de servicios públicos, logró adelantar una rápida estratificación de las casas, calles y barrios, indicando en la tarifa de servicios de cada hogar el estrato al que pertenece. Sistema de clases aún vigente, que probablemente ha incidido en la construcción de representaciones y prácticas de inequidad en dicha urbe.

inteligencia y seguridad F-2<sup>7</sup>, en el mismo eje del parque, en la avenida 76. En los años ochenta se les sumó la sede principal en Medellín del Departamento Administrativo de Seguridad Nacional (DAS), liquidado a finales del 2011. Todo esto, al parecer, correspondía a una lógica de seguridad, según la cual las instituciones del Estado debían estar en las zonas “seguras” de la ciudad.

La casa que eligieron mis padres quedaba en La Gloria, uno de los 21 barrios de Belén; era una casa pequeña, con dos cuartos, que pagaron a cuotas por más de veinte años; esta casa, y las dos de al lado, tenían la función de frontera, esquina y frente. De frontera, hacia el costado izquierdo, donde existía una cañada o quebrada con un pequeño puente que daba al barrio La Palma, en donde vivían los privilegiados del estrato 5, cuyos habitantes nunca pasaban de este lado del puente; de esquina, como entrada alterna hacia las pequeñas calles de El Hueco, La Cachucha, El Chispero y La Isla, calles del estrato 1 y 2, tramadas por rezagos de casas de tapia y pequeñas casafincas, a las cuales habían llegado campesinos desde principios de siglo, oriundos de diversos municipios del occidente del departamento de Antioquia, como Heliconia, Ebéjico y Armenia Mantequilla: estas calles, desde el fondo, eran custodiadas por el F-2; y de frente, teníamos ante nuestras ventanas la única finca grande que quedaba en el barrio, convertida en un criadero de ganado, especialmente de caballos y de vacas, conocida como La Pesebrera. Para jugar, los niños teníamos una larga garganta con riachuelo a la izquierda y una finca al frente: ¡parecería un paraíso!

Pero este lúdico escenario tenía sus excepciones: contigua a La Pesebrera quedaba el preventorio (dispositivo para la prevención de la propagación de enfermedades contagiosas, como la tuberculosis), que luego se convertiría en un centro comunitario. Aquel era un espacio vetado, una especie de espacio del miedo, un tabú en el barrio, un lugar que nunca nadie mencionaba, del que ninguno sabía absolutamente nada; su signo, para nosotros, los de al lado del caño, era un largo muro que se elevaba y evitaba el intercambio y desplazamiento directo hacia las calles de El Hueco, La Cachucha, El Chispero y La Isla. No solo era mal visto que los pobladores del barrio del estrato 5 pasaran al nuestro, al 3, sino que los del 3 pasáramos a las calles de los estratos 1 y 2. En un espacio de menos de un kilómetro cuadrado convergían cinco estratos socioeconómicos y cuatro grandes entes de seguridad y saneamiento de la ciudad.

<sup>7</sup> Entidad de policía e inteligencia de los servicios de seguridad del Estado. En 1953, por el Decreto 1814, se traslada a la subordinación de la Policía del Ministerio de Gobierno, donde funcionaba desde sus orígenes el Ministerio de Guerra. Las funciones fueron dadas a: personal (F-1), inteligencia (F-2), operaciones (F-3), logística (F-4). Esta institución de seguridad estatal fue liquidada por medio de un acto administrativo, y en Medellín su sede física se destinó, en el año 2006, a la construcción de una de las bibliotecas públicas de la ciudad.

Los dueños de La Pesebrera decían que eran miembros de un grupo de comerciantes de ganado vinculados en sus negocios con la familia Ochoa Vásquez, posteriormente señalada como el clan de los Ochoa —quienes fueron parte principal del creciente narcotráfico en la ciudad y el país—. <sup>8</sup> A esta finca, en medio de la urbe, a mediados de los ochenta, al finalizar cada mes, llegaban decenas de autos último modelo: Mercedes Benz y BMW, entre otros. Sin saberlo, a la edad de once años y desde la ventana de mi casa, tenía todo el panorama sociopolítico ante mis narices, pero ninguna posibilidad de comprender los acontecimientos históricos que allí se insinuaban. En efecto, no podía comprender nada, y quizás hoy comprenda todavía poco sobre este país.

Frente a la mirada precaria de mi familia aparecían las primeras prácticas exhibicionistas del narcotráfico en la ciudad: yeguas relucientes, costosos caballos y autos ostentosos eran montados y conducidos por los nacientes traficantes; convocados por las tradicionales apuestas de peleas de gallos que se irrigan del campo a la ciudad, sus amigos, empresarios y comerciantes visitaban La Pesebrera acompañados de exuberantes y radiantes mujeres para complacer su tradicional machismo; esta arriería varonil era complementada por el toque de mariachis; todo ello siempre duraba hasta altas horas de la madrugada.

Mi padre sabía que no podía hacer nada para callar aquel festín mensual: llamar a la policía produciría risa; el dinero empezaba a circular a borbotones en la ciudad; así que, como él, guardábamos silencio, un hábito instaurado por el temor, elemento que ha sido durante décadas uno de los principales mecanismos asociados a las prácticas de la violencia: la agencia y la gestión del miedo como recurso de control social y cultural.

Hoy comprendo por qué en aquella infancia mis padres me prohibían pasar a La Pesebrera. Podían, desde su moral, vislumbrar una serie de problemas que se desprendían de ese estilo de vida; pese a ello, a diario llegaba hasta la casa ese rico olor a campo, que salía de la boñiga de sus alazanes y de la leche caliente de las vacas, un aroma esparcido por el viento hasta las ventanas de nuestra vivienda. Excepto por un pequeño puñado de niños, vecinos de las dos cuerdas a espaldas de la casa —de la ladera de la canalización del caño y de la esquina

<sup>8</sup> Al inicio del capítulo IV del libro *Los jinetes de la cocaína* se muestra cómo el secuestro de Martha Nieves Ochoa Vásquez, hermana de Jorge Luis Ochoa, jefe del clan Ochoa, “dividió la historia del narcotráfico en Colombia”. Martha había sido secuestrada por un grupo de la guerrilla del M-19 para financiar sus operaciones. La respuesta organizada de los Ochoa y la mafia creó el MAS (Muerte A Secuestradores), un dispositivo de justicia (venganza) privada. Para conformar el MAS “fueron citados los jefes de las grandes organizaciones dedicadas al tráfico de cocaína en Cali, Medellín, Leticia, Bogotá, Cartagena y Barranquilla. La cita se cumplió en el Estadero Las Margaritas, de propiedad de los Ochoa, situado en las afueras de la ciudad [...]”. Ver Fabio Castillo, *Los jinetes de la cocaína*. Bogotá: Editorial Documentos Periodísticos, 1987, capítulo IV, p. 44.

derecha—, las posibilidades de interactuar con otros niños de los barrios fronterizos era casi inexistente. En los años ochenta, las calles entre mi casa y el F-2 se iban abriendo a la delincuencia y al expendio de drogas, y para los pares de La Palma pertenecíamos a la “baja cultura”. Muy de vez en cuando, algún familiar de los jóvenes del barrio o, pocas veces, de las calles de El Hueco, La Cachucha, El Chispero o La Isla visitaba a mi padre para pedirle asesoría sobre qué hacer para sacar a su hijo del calabozo, antes de que fuera transferido a la cárcel de la ciudad: Bellavista.

Los ángulos de las relaciones espaciales que se divisaban desde la casa eran una geografía de relaciones sociales que se podía describir en términos análogos a los de una figura geométrica cargada de tensiones: de un lado estaban los “ricos”, que nunca pasaban hacia nuestro barrio; del otro, en La Pesebrera, estaba la naciente clase económica y empresarial de los años ochenta —traficantes en todas sus modalidades—; y, sobre el costado derecho, se encontraban quienes en parte serían la mano de obra de los anteriores. No en vano, en los años setenta y a principios de los ochenta, varios de los jóvenes del barrio trabajaban en La Pesebrera en el ordeño de vacas y en la doma de caballos; muchos de ellos, venidos del campo, terminaron en las filas de las primeras bandas delincuenciales del barrio y de la ciudad.

El panorama lo cerraría, a espaldas de la casa, en todo el borde de La Gloria, cruzando la avenida 80, el DAS. El miedo, la intimidación y la amenaza se fueron apoderando del barrio —reflejo de los problemas de la ciudad y del país— y los complementó la llegada de este nuevo miembro, numeroso, extenso e institucional, hasta hoy en cuestión por el tipo de prácticas establecidas en contra de la ciudadanía, de los políticos, y de los opositores al gobierno del expresidente Uribe.

En esta cuadrícula, nosotros, los hijos de la clase empleada de la ciudad, situados en el estrato medio bajo, con posibilidades de pagar casa propia durante años —según la disciplina económica o la llamada “apretada de cinturón”—, seríamos uno de los campos donde se libraría la mayor guerra simbólica, imaginaria y concreta de la ciudad. Esto en medio de la aceptación resignada en privado y del silencio en público ante lo que acaecía día a día.

Con los años esto sería, para los Secretarios de Inspección y los vecinos, asistir al continuo ritual del levantamiento de cientos de cuerpos de jóvenes atrapados en la guerra económica, social y política que se expandió con el narcotráfico desde los barrios de la ciudad de Medellín.

## SIGNOS DE UNA ÉPOCA

Los procesos familiares de lucha por la subsistencia, la lógica barrial de la delincuencia, el crecimiento del narcotráfico en la ciudad y el país, y el conflicto armado, sustentan el marco de situaciones de la *arqueología de las emociones*<sup>9</sup> que aquí narro. Este término lo acuño como posible línea o campo de estudio, como una arqueología de eventos vitales de ingrata pero comprensible recordación, que posee su mayor evidencia en la prensa y en los álbumes familiares.

A la edad de siete años, pocas veces nos había visitado mi abuela paterna; ella venía del Carmen de Viboral, de donde era originaria, entonces un pueblo a dos horas de camino en auto desde Medellín. Era 1978, había enviudado en 1975, y con casi sesenta años había decidido emigrar a la ciudad. En su segundo día de estadía en casa dijo que quería salir de paseo conmigo, con tal sombra en nuestra suerte que no llevando más de una cuadra fuimos abordados por dos ladrones que la asustaron con un puñal mientras le quitaron el reloj. Largó en llanto y nunca más quiso volver a visitarnos; ¡Pero si era un “buen barrio”!

Así conocí qué era un robo, lo que posteriormente sería *habitus*<sup>10</sup> cotidiano en la narrativa urbana de familiares, vecinos, amigos y medios masivos de comunicación. “La marihuana fue el emblema cultural de toda una generación, dentro de la que se destacó el malevo de barrio, cuya cotidianidad transcurría entre lanzar piropos a las colegialas, jugar fútbol y protagonizar ocasionales grescas con piedra y hondas contra otras galladas del barrio”.<sup>11</sup>

Los malevos, los infractores y la delincuencia común hacían su presentación formal en mis procesos vivenciales; y, sin tener conciencia de ello, hoy sé que al mismo tiempo se implementaba en el país el Estatuto de Seguridad del gobierno de Julio César Turbay Ayala, justificado en el desempleo, los problemas de orden

<sup>9</sup> Acuñé este término como consecuencia del trabajo realizado como investigador del caso “Masacre de La Rochela”. En dicha investigación comprendí cómo los familiares conformaron una arqueología emocional con sus álbumes de la memoria: recortes de periódicos, diarios y archivos judiciales. Cada dato está adscrito a un hecho social y a una emoción particular, a un *emocionar* que ha creado el fondo afectivo desde el cual interpretan y dan sus luchas por la justicia en medio de las coyunturas y acontecimientos históricos.

<sup>10</sup> Pierre Bordieu plantea el concepto de *habitus* como un sistema de disposiciones socialmente constituidas que, en cuanto estructuras estructuradas y estructurantes, son principio generador y unificador del conjunto de las prácticas y de las ideologías características de un grupo de agentes. La noción puede ampliarse en su libro *Campo de poder, campo intelectual y habitus de clase*. Buenos Aires: Folios Ediciones, 1983.

<sup>11</sup> Gilberto Medina Franco. “Basuca street. Las milicias y el manejo de la droga”, en *Historia sin fin. Las milicias en Medellín en la década del 90*. Medellín: IPC, Instituto Popular de Capacitación, 2006. Consultado el 22 de marzo de 2011. <http://bibliotecavirtual.clasco.org.ar/ar/libros/colombia/ipc/historiamilicias.pdf> ISBN: 9589783007.

público y especialmente para enfrentar el crecimiento de la insurgencia. Pero dicho estatuto coincidió con la persecución, tortura, desaparición y asesinato de cientos de líderes comunitarios e intelectuales de la época.

En ese entonces, por razones de camaradería o por el afán para realizar las diligencias de levantamientos de cuerpos, a mi padre lo llevaban a casa en “la bola” —así le denominaban los secretarios al auto oficial, por la sirena que posaba sobre su capota—. Pero, en el barrio, a esa furgoneta de la Inspección de Permanencia la llamaban “patrulla”; y otros, los más cercanos a la delincuencia la llamaban “la parca”: en ese carro llevaban a ladrones capturados, o los cuerpos de los muertos hacia las instalaciones de Medicina Legal. Pero para el común de la gente, y en especial para los más niños y jóvenes, era el carro de la ley o de la policía; pero allí la ley era asociada, e incluso lo es hoy, con el accionar de personas uniformadas portadoras de un bastón de mando —garrote— o de una pistola, no con una instancia simbólica abstracta, protectora y común, como lo creemos los académicos y como lo ha propuesto el Estado de derecho.

Mi padre, por transportarse en los vehículos relacionados con la ley, era percibido como un policía más, no como el secretario que era, y los demás suponían que cargaba un arma, cosa que él nunca hizo. “La bola” frente a La Pesebrera podía ser factor de zozobra y ansiedad para algunos de los jóvenes infractores que ya empezaban a pulular en el barrio.

En 1980, fruto de una diferencia de juego con mis pares del pequeño barrio, unos ocho o diez niños con los que jugaba al fútbol se unieron, y mantuvieron firme durante más de un año el pacto de no volver a invitarme a jugar ni a hablarme. A esa edad se hiere fácil el amor propio; con todo, hoy comprendo que me habían puesto en el lugar del chivo expiatorio. ¿Cómo podían producir el confinamiento de otro niño, excluirlo, negarlo, no hablarle, hacerle sentir todo el peso de la diferencia, proscribirlo al silencio? Era en ese momento una pregunta que surgía, no en estos términos sino como un gran cúmulo de rabia y frustración, la cual volcaría después de la misma manera o con más fuerza frente a otros niños.

Fácilmente pasé a ser el chivo expiatorio del imaginario de los nacientes y pequeños delincuentes del barrio. Era “el hijo del inspector” o del “policía investigador”, decían ellos; en consecuencia, estaba en una posición de tiro al blanco para poder tramitar su agresión contra la ley.<sup>12</sup> A los doce años, en 1983, recibí las primeras

<sup>12</sup> En la actualidad, este fenómeno social ha sido reconocido y nombrado como *bullying*. Está basado en la intimidación, el acoso y la conspiración escolar o barrial entre menores contra menores. Como tal, el fenómeno ha existido desde hace décadas; hoy, gracias a que fue nombrado en el lenguaje del norte, se ha convertido en un problema de investigación para los países del sur. Las modalidades de la amenaza, el bloqueo social, el hostigamiento, el aislamiento, la agresión, son sus variables más características. Sin embargo, antes que pensarla como una patología psicosocial

amenazas directas de los chicos molestos con la ley: uno de ellos me acosaba con una “perica”<sup>13</sup> en la mano, montado en su bicicleta con la intención de apuñalarme.

Pero mi padre no lo creía: “¿quién habría de querer dañar al hijo de un estimado representante de la ley?”, suponía. Un vecino, con unos cuantos años más de edad que yo, me ofreció en privado su protección, a cambio de unos días de la mesada recibida para el refresco del día. Estos jóvenes, en los próximos cinco años, se convertirían en los sicarios de una de las bandas más peligrosas del barrio Belén.

En 1986, a los quince años, ya sabía —como todos los jóvenes del barrio— que tenía que aprender a lidiar con estas cosas. Ese año otros tantos fueron hasta la casa para agredirme de nuevo, con el evento inesperado de que mi madre salió a hablar con ellos para mediar en la situación. De esta pelea de “niños” dispuestos a matar, resultaría convertido en el nuevo “amigo” de los agresores; por ese efecto de la lealtad de ellos para con mi madre menguó la agresión, pero pasarían cosas que ella, en sus buenas intenciones, no podía calcular.

Departí con mis nuevos amigos durante meses; en consecuencia, los acompañé en sus fantasías, planes, y en algunas infracciones menores. Pasaron pocos meses antes de que sus “culebras” u oponentes empezaran a cobrarles sus deudas; en dos o tres meses mataron a cinco de ellos y, como de vez en cuando pasaba a saludarlos por aquello de que ya era su amigo, el riesgo de estar entre ellos no era despreciable. Por este hecho dejé de hacerlo; también abandoné el colegio y pasé ocho meses confinado en la casa, con la ventaja de que así, a los quince años y encerrado, pude tener mis primeras aproximaciones como aficionado a la filosofía, en especial a los libros de filosofía oriental. Se habían dibujado en un pequeño espacio el conjunto de las diferencias de clase, un territorio de muchos barrios y distancias de estatus, todas de alguna manera articuladas al proyecto del progreso de la ciudad, orientado por la industrialización, la comercialización, la cultura del servicio y la narcoeconomía de Medellín.

Cumplí dieciocho años en 1989<sup>14</sup>; cuando creía ingenuamente que era adulto fui a un baile de jóvenes en un barrio de estrato medio; allí, por querer evitar que golpearan a un menor, hice las veces de mediador, como mi madre —de entrometido, dicen en el barrio—, y fui golpeado sin cesar por un grupo de jóvenes, amenazado de muerte y desterrado a no volver al barrio La Nubia, que rodeaba al DAS.

debemos llamar la atención sobre la relación de estas prácticas y su contexto social, sobre el modo como los más jóvenes asimilan y reproducen los *habitus* de la violencia.

<sup>13</sup> Nombre que en la ciudad les daban a las navajas y puñales automáticos.

<sup>14</sup> En 1989, en Colombia se realizaron cientos de asesinatos; entre ellos varios magnicidios: el de los candidatos a la presidencia Luis Carlos Galán, Pizarro León Gómez, Bernardo Jaramillo Ossa, y el de la Comisión de los doce investigadores en La Rochela, Santander.

La ira y la venganza recorrían las calles de los barrios de la ciudad. La creciente ola de delincuencia y sicariato no era solo exclusividad de los barrios marginales, de las estigmatizadas comunas del nororiente urbano; en el occidente de la ciudad se vivía la otra cara de la moneda: los *traquetos*<sup>15</sup> eran asesinados en los barrios de “los ricos”, y los jóvenes de los estratos medios trataban de acceder al mercado de la delincuencia y el narcotráfico, probando finura, tal como lo venían haciendo los jóvenes de los estratos excluidos de la ciudad.

Entre 1985 y 1990 asistí al velorio de varios compañeros cercanos del barrio y de otros que estudiaron en el mismo centro educativo, y tuve noticia de la finitud de distintos conocidos. En Medellín, a finales de los ochenta, la guerra entre pandillas había pasado a ser guerra de bandas entre los soportes de la acción criminal del narcotráfico y de la guerra sucia; posteriormente pasó a ser la guerra entre las autodefensas urbanas y los delincuentes. Después haría parte del proyecto militar y político de las guerrillas urbanas, y a su vez, progresivamente, del mercenarismo y el paramilitarismo que enfrentarían a la subversión y a sus supuestos aliados o “guerrilleros de civil”.

En 1990 ingresé a la par a las dos universidades públicas de la ciudad, gracias a los meses en los que me encerré para protegerme y leer por voluntad propia —en estos contextos disruptivos se llama voluntad propia a la incorporación y asimilación de una decisión por la mediación y posterior negación del miedo—. Decía, esos meses de lectura parecieron dar resultado al presentarme a los exámenes universitarios. Comencé a estudiar ingeniería en la Universidad Nacional y filosofía en la Universidad de Antioquia. En la academia creí encontrar el sueño, el campo ideal y la salida a los problemas del barrio; pero curiosamente ninguna de las dos carreras las terminaría, por nuevas amenazas de muerte.

La nueva amenaza me llegó de un traqueteo venido a menos, ni siquiera de un “lavaperros”<sup>16</sup>, pero que tenía un profundo afán de mostrar que era un “duro”<sup>17</sup>; él, que vivía en el barrio Laureles —uno de los espacios urbanos de la clase alta de la ciudad—, investigó los datos de mi familia para amenazarla de muerte. El resultado: dejé ambos programas de estudio para evitar la persecución. Ante la denuncia que hice de estos hechos en la Inspección de Policía, me ofrecieron un papel llamado

<sup>15</sup> Este nombre se asigna a quienes tienen vínculos con la mafia, a los mandos medios y a los traficantes de drogas, especialmente de cocaína. Se diferencia de los capos porque su labor está estrictamente relacionada con llevar, cobrar y coordinar o participar en el *tra-que-tra-que* —expresión onomatopéyica que hace referencia al sonido de las ametralladoras.

<sup>16</sup> Pequeño narcotraficante.

<sup>17</sup> Apelativo que se usa entre la delincuencia para describir a quienes no tienen miedo para llevar a cabo sus misiones, negocios y transacciones.

“Orden de protección”, no propiamente para protegerme sino para indicar que en caso de muerte o accidente el autor de la amenaza sería el primer sospechoso.

Para esa época mantenía presente en mi mente el signo del recién publicado libro *No nacimos pa' semilla*<sup>18</sup>, junto con las imágenes de la película *Rodrigo D: no futuro*<sup>19</sup>, dos productos de la industria cultural local que denunciaban lo que pasaba con los jóvenes de la ciudad pero que a la par sesgaron la mirada de periodistas, investigadores y académicos sobre los jóvenes de Medellín, bajo la inocua concepción de la “pornomiseria”.

En ese momento ya sabíamos que para la mayoría de los adultos las amenazas en la ciudad eran temas menores; frente a la cantidad de homicidios, las intimidaciones eran un *habitus* “normal”. Los jóvenes aprendíamos así que los delincuentes comunes, los sicarios y los traquetos se habían tomado la ciudad; y no solo la ciudad como el espacio público de referencia social y cultural. La cultura *narqueta* y *paraca* empezó a cubrir todo el espectro. Los otros, los que “escapamos”<sup>20</sup>, y quienes no queríamos hacer parte del modelo sociocultural imperante, no podíamos tener un lugar explícito en la cultura política de la ciudad ni en las políticas públicas; ellas debían concentrarse en la atención de los delincuentes.

Pensé en seguir una carrera que ofreciera otras opciones laborales, y tomé la psicología como una alternativa, en la Universidad de Antioquia; así “ingresé” a la política: en 1993 tomé la representación estudiantil de los estudiantes de psicología ante la Coordinadora Estudiantil Universidad de Antioquia (CEUA), y rechacé el lenguaje rezagado y las propuestas de los líderes de la izquierda universitaria que a principios de los años noventa clamaban consignas de los años sesenta y setenta. En poco tiempo renuncié a tal escenario, por lo cual merecería el calificativo

<sup>18</sup> Publicado en 1990, es probablemente el libro sobre sicariato más vendido en Colombia y en múltiples ciudades de Latinoamérica. Su autor, el periodista Alonso Salazar, se desempeñó como alcalde de Medellín. Curiosamente, el título de su libro no fue profético: en su administración se vio en la obligación de combatir a los jefes y mandos medios de la “Oficina de Envigado”—la mayor red criminal del narcotráfico en el país—, todos ellos semilla de las décadas de los ochenta y noventa, que parecieron haber encontrado la fórmula para multiplicarse y perdurar bajo el modelo de alias “Don Berna”. La ironía para el periodista Alonso Salazar fue lidiar con el problema que negaba el título de su libro, segar las semillas que dieron fruto desde las décadas de los ochenta y noventa.

<sup>19</sup> Película del director Víctor Gaviria, ovacionada por los neorealistas y amantes de la escuela de los “actores naturales”. Además de ser un homenaje a sus actores: John Galvis, Jackson Gallegos, Leonardo Sánchez y Francisco Marín —que fueron asesinados antes de cumplir los 20 años de edad—, la película está sujeta a discusiones: como cine documental terminó siendo un instrumento de denuncia que abrió el interés por estos fenómenos sociales, pero a la vez se convirtió en un mecanismo que multiplicó, dispersó y difuminó el estigma sobre los habitantes de las comunas de la ciudad.

<sup>20</sup> El entrecomillado alude a la paradoja de la memoria: en la medida en que se recuerda no se puede escapar de aquello que se recuerda.

de “pequeñoburgués” —como si la condición universitaria no nos proveyera dicha posición a todos los estudiantes.

En 1992 me había comprado un gorro rojo con buena visera, de esos que no dejan ver el rostro a la distancia; con él bien puesto, llegando en una oscura noche a casa, se me abalanzaron cuatro hombres con revólver en mano que apuntando a mi cabeza gritaban: “Aquí está este hijueputa: matémoslo de una vez”. Con un tímido gesto de temor alcancé a quitarme la gorra; se excusaron y, apenados por la confusión, me obsequiaron una ramita de ruda que cargaban para la buena suerte en sus billeteras: “Esto es para que no le pase nada, *parcero*”. Ellos hacían parte de una numerosa familia recién llegada al barrio, que estaba conformada por padre, madre y ocho o nueve hijos varones; se decía que todos, excepto los dos menores, conformaban una banda criminal familiar, con contactos y conocimiento de todo lo que sucedía en la ciudad y el país.

El mayor de ellos era investigador del DAS —el barrio se había llenado de estos empleados de la seguridad, que se fueron a vivir cerca de su lugar de trabajo—; el segundo hijo recién llegaba de cumplir una pena en las cárceles alemanas por tráfico de drogas; y el siguiente era el líder de los negocios que realizaba con los demás hermanos. A los dos menores no los dejaban participar de nada: los cuidaban con el propósito de que estudiaran. Esta familia vecina del “buen barrio” de Belén era el signo de una época. En los años que siguieron, varios de ellos fueron asesinados, pero ninguno podía considerarse una víctima; así como tampoco aquellos que habíamos sido objeto de intimidaciones.

En efecto, el barrio Belén, sin estigmas sociales como los que cargan los barrios de la zona nororiental o de la Comuna 13 de la ciudad, era un buen barrio; lo que pocos sabían era lo que se asociaba con distintos sectores del F-2 y del DAS. Se rumoraba en la leyenda urbana que los dueños de la prendería de Belén, “La Prende” —ubicada una cuadra detrás de La Pesebrera— por una *faltoniada*<sup>21</sup> buscaron el apoyo del F-2 y de cuerpos élites de seguridad para exterminar a la banda de “Los Priscos”<sup>22</sup>, quienes

<sup>21</sup> Que cometieron falta o contrajeron deuda impagable en los negocios.

<sup>22</sup> Los Priscos “trabajaron durante años para el Cartel de Medellín. Sindicados de participar en varios de los magnicidios que sacudieron a Colombia durante los años ochenta, David Ricardo Prisco y sus hermanos mandaron a levantar con el dinero recibido por sus primeros crímenes una estatua de la virgen del Carmen en su vieja casa del barrio Aranjuez [...]. Prisco, Chino o Richard reclutó más de 300 hombres para la ejecución de secuestros, atentados terroristas y asesinatos [...]. David Ricardo está vinculado a los asesinatos del ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla; del director de *El Espectador*, Guillermo Cano Isaza; del magistrado Hernando Baquero Borda; del juez primero superior, Tulio Manuel Castro Gil; del procurador Carlos Mauro Hoyos; del gobernador de Antioquia, Antonio Roldán Betancur; del coronel Valdemar Franklin Quintero; y del coronel Jaime Ramírez Gómez”. Ver Nullvalue, “Prisco: el que a hierro mata a...”, *El Tiempo*, 23 de enero de 1991. Disponible en: <http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-13995>

estuvieron al servicio del Cartel de Medellín y luego del Cartel de Cali para combatir a Pablo Escobar. “Los Priscos” quizás fue la banda más establecida y temible de la ciudad, antes de la que organizó Don Berna<sup>23</sup>, llamada “La Terraza”<sup>24</sup>. Todas ellas al servicio del narcotráfico y posteriormente del paramilitarismo.

Para 1993 Belén era un barrio “muy seguro”. La Pesebrera desapareció; dio paso a un gran parqueadero y a una nueva y cerrada unidad residencial. Recién abierto, el parqueadero fue dinamitado en el saldo de cuentas que recorría la ciudad. El estruendo golpeó a todo el barrio en plena época de los bombazos. Unos segundos después de la explosión, aproximadamente a las ocho de la noche, salí con mi padre en busca de mis hermanos que jugaban en la calle, y entramos todos rápido a la casa; a tan solo una cuadra venían corriendo los vecinos, aturdidos, ya que de regreso de su trabajo la explosión los había tomado muy cerca. Los carros del F-2 en busca de responsables los interceptaron unos metros antes de llegar a su casa, que era la contigua a la nuestra; desaparecieron duante casi una semana; días después comentaron “en secreto” que en los calabozos del F-2 —a cinco cuerdas de casa— los habían torturado durante todos esos días, y los amenazaron con que si decían algo en público los matarían. Las muertes no solo eran producto de la guerra entre bandas, milicias y paramilitares. Los hombres de paz, los mediadores

<sup>23</sup> Alias Don Berna es Diego Fernando Murillo Bejarano. Primero militó en la guerrilla del EPL en la década del setenta, luego pasó en los ochenta por el Cartel de Medellín como guardaespaldas de los Galeano, socios posteriormente traicionados por Pablo Escobar; por ello se convirtió en uno de los cabecillas de los PEPES (Perseguidos por Pablo Escobar) y colaboró con la DEA para dar de baja a Pablo Escobar. Posteriormente organizó y estuvo al mando de la banda La Terraza, de la Oficina de Envió y del bloque paramilitar Cacique Nutibara, este último con más de 4.000 hombres armados desplegados en la ciudad de Medellín. Desde el 2001 atacó y forzó a que se le adhirieran miembros de la guerrilla urbana y de la delincuencia organizada. En ese proceso coordinó el asesinato de su oponente por el poder de la ciudad, eliminó a Rodrigo *doble cero* entonces jefe del Bloque Metro, este último muy cercano a Carlos Castaño, quien no intervino en el conflicto entre ambos. Según las confesiones de alias “Monoleche”, Don Berna también fue agente central en el proceso de asesinar a Carlos Castaño.

<sup>24</sup> “La Terraza es la banda más grande, organizada y tenebrosa de Medellín, conformada por unos 300 hombres, entre ex milicianos, delincuentes y ex policías. Según las autoridades, este grupo tomó su nombre de un salón de billares del barrio Manrique de la comuna nororiental de esta ciudad, en donde cometió sus primeros actos delictivos. Se hizo fuerte cuando el difunto jefe del cartel de Medellín, Pablo Escobar Gaviria, empezó a utilizarlos en su organización y a pasarles mensualmente una cuota de dinero, independientemente del trabajo que realizaran en ese tiempo. Los miembros de esta banda empezaron a trabajar después con el cartel de Cali —cuando este comenzó su guerra contra Escobar Gaviria—, para MAJACA (Muerte a Jaladores de Carros) y para los PEPES (Perseguidos por Pablo Escobar); el grupo fue conformado por los hermanos Castaño Gil y los narcotraficantes de Cali [...]. También a miembros de La Terraza se atribuyeron en un informe de la revista *Semana* los asesinatos de los investigadores del Cinep, Elsa Alvarado y su esposo Mario Calderón, por orden de los hermanos Castaño Gil”. “La poderosa banda de la terraza”. Periódico *El Tiempo*, 13 de enero de 2000. Disponible en: <http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1290107>.

simbólicos y la gente de los barrios también era asesinada por razones tácticas o de terror en las comunas de Medellín.

Para 1997 tuve que asumir los gastos del desplazamiento interno de mi familia dentro de la ciudad, tanto por la seguridad de mi hermano menor como por la mía. Un vecino le informó a mi hermano que habían dado la orden en el DAS de limpiar sus alrededores, dado que el barrio estaba “podrido” de consumidores y delincuentes; y que la esquina de nuestra casa, por ser punto de cruce de caminos, sería uno de los focos de sus acciones. Actividades llamadas por algunos: programas de “limpieza social”<sup>25</sup>; y que lo mejor era “que nos fuéramos, que ellos sabían quién era quién en cada casa y que mi hermano y yo no debíamos preocuparnos, pero que era mejor evitar errores” (un año después, al informante filial lo asesinaron en la guerra de bandas).

Ya teníamos suficientes datos para tomar esto en serio; ayudé con los gastos iniciales, y nos cambiamos de barrio durante un año. Las amenazas fueron ciertas; muchos no las tomaron así y fueron asesinados: en una misma semana, cuatro jóvenes de la cuadra, algunos de ellos sin relación con las prácticas delictivas de las que acusaban a los jóvenes del barrio, fueron asesinados; el margen de error de la “limpieza social” era alto.

Terminado ese año recibí el grado de psicólogo, y mi primer empleo fue en la Comuna 13. La ONG francesa, ENDA América Latina, venía realizando un trabajo de apoyo a las mujeres cabeza de familia o jefes de hogar, y tenían la novedosa estrategia de promover el trabajo con padres varones sobre su paternidad y los modelos tradicionales de masculinidad. De esta última estrategia de investigación participante me ocuparía entre 1997 y 2001. Aunque la sede comunitaria quedaba a la entrada de la Comuna, cada vez que iba a ir al barrio era necesario llamar para saber si no había “paro armado guerrillero”: una actividad que consistía en el toque de queda, una especie de estado de excepción que exigía el cierre de negocios y el bloqueo de toda la movilidad en los barrios de la comuna, so pena de muerte a quienes incumplieran la orden.

Las milicias urbanas se habían tomado la Comuna 13 en la última década; sin embargo, a principios del año 2000 ya se hablaba de la llegada de los paramilitares, que querían sacar a la guerrilla de esos barrios. La Comuna 13 era la entrada de un corredor estratégico para las milicias urbanas de la guerrilla de las FARC, el ELN, y los CAP (Comandos Armados del Pueblo); era el límite de la ciudad con la zona rural de San Cristóbal y Palmitas, que tenía por trasfondo al río Cauca, una ruta ideal para desplazarse hacia el interior del país.

<sup>25</sup> Está en mora pensar lo que se ha hecho en nombre de la “limpieza” en Medellín y en el resto del país; estudiar cuáles han sido los efectos de las prácticas culturales de la “limpieza”, su orden y sus articulaciones con prácticas criminales, desde y por fuera de la estatalidad.

En el 2001 fui invitado a trabajar con la Cámara de Comercio y la Arquidiócesis de Medellín en uno de los programas de Paz y Convivencia para la ciudad; el objetivo: formar a los líderes de las bandas criminales de la ciudad encarcelados, en métodos alternos de resolución de conflictos. Se trataba de un grupo de cuarenta líderes de la delincuencia, que representaban barrios o zonas de la ciudad, y que asistían a las sesiones más por la búsqueda de rebajas de penas que por las apuestas pedagógicas o los fines mismos del programa.

Uno de ellos me invitó a unirmeles y me ilustró su proyecto; como siempre, y con todo ante mis narices, yo no lograba entender absolutamente nada. La historia va más rápido que nosotros: nuestras elaboraciones sobre el presente parece que siempre están en pasado. Este líder me decía que con ellos ya había administradores, comunicadores, líderes comunitarios; y que en su barrio alcanzaban ya una organización de setecientas personas. A su invitación, como a la de otros, le dije que no, pues nunca pude trabajar con personas armadas. En realidad lo que me estaba presentando con gran orgullo era la articulación del creciente proyecto paramilitar bajo órdenes de Don Berna en la ciudad de Medellín.

Entre tanto, desde mi casa, a altas horas de la noche se escuchaban los tiros de fusil; era la guerra abierta por el control de la ciudad entre los hombres del paramilitarismo del Bloque Cacique Nutibara contra el Bloque Metro, dirigidos por Don Berna y Doble Cero,<sup>26</sup> respectivamente. En el barrio comentaban que en el DAS existía una división interna entre quienes apoyaban las acciones del Cacique Nutibara y los que se oponían a dicha alianza. Este era el panorama conflictivo de la ciudad para el 2002:

[...] la desarticulación del Cartel de Medellín no significó la recuperación del monopolio de la fuerza sino su fragmentación. En el 2002 diversos estimativos calculaban cerca de 650 bandas armadas en la ciudad (*El Mundo*, 2002), sumadas a tres bloques de las autodefensas (José Luis Zuluaga, Bloque Metro y Bloque Cacique Nutibara); dos frentes, un proyecto y una estructura urbana del ELN (Carlos Alirio Buitrago, Bernardo López, el Proyecto Romeral y el Regional Medellín, aglutinados en la llamada área industrial); el grupo miliciano independiente Comandos Armados del Pueblo; y diversas estructuras del Bloque José María Córdoba de las FARC. (Giraldo 2007:7)

<sup>26</sup> Los modelos paramilitares de Doble Cero y Don Berna se oponían: mientras Doble Cero no concebía un paramilitarismo basado en la producción del narcotráfico, Don Berna era desde hacía varios años el capo de las drogas en la ciudad de Medellín. Esto generó un desequilibrio militar entre ambas fuerzas; el número de efectivos del Cacique Nutibara multiplicaba 20 veces el del Bloque Metro. El exterminio y el rendimiento fueron inevitables.



En el 2002, entre el 16 y el 20 de octubre, se atacó militarmente, mediante la operación "Orión"<sup>27</sup>, a las guerrillas afincadas en la Comuna 13. Por primera vez en Colombia un barrio de un centro urbano era embestido por helicópteros artillados. Coincidentalmente, yo no vivía ya en el barrio Belén, sino con mi esposa en un pequeño departamento en la avenida 35. Diez cuadras más arriba el ejército apostó la base de su operación. Desde el lugar, veíamos subir los carros con militares y bajar las ambulancias con los heridos. Si alguien me preguntara cómo puede un habitante de la ciudad estar cerca de tantos acontecimientos de violencia, la respuesta no sería solo histórica sino geográfica: Medellín es una ciudad estrecha y pequeña, muy pequeña en múltiples sentidos.

En el transcurso de las décadas de los ochenta, los noventa y en los inicios del nuevo siglo nunca se habló de un discurso institucional para atender o dar un lugar a las víctimas del conflicto; solo se daban cifras de muertos, secuestrados y desaparecidos. El surgimiento de pillos, sicarios, traquetos, narcos, autodefensas urbanas, milicianos, oficinas de los crímenes organizados y paramilitares solamente fue acompañado del lugar de enunciación de las víctimas a partir del año 2005. Aunque sectores y movimientos políticos opuestos a los gobiernos liberales y conservadores ya lo habían nombrado, estos no eran escuchados en el escenario público nacional.

Mi trabajo de campo como psicólogo social, igual que el de miles de profesionales de las ciencias sociales y humanas, en los barrios de las personas excluidas y vulneradas de la ciudad, estaba directa o indirectamente sometido a la presión de los grupos armados de la extrema derecha e izquierda. En 2003, la ESAP, Escuela Superior de Administración Pública de la ciudad de Manizales, por medio de su Instituto de Derechos Humanos Guillermo Cano<sup>28</sup>, me ofreció la opción de presentar los talleres de Derechos Humanos (DDHH) sobre desplazamiento forzado y resolución de conflictos en varios de los municipios y corregimientos del Departamento de Caldas. La primera advertencia que me hicieron fue: "Vas a hablar de derechos humanos pero tienes que saber que en los grupos hay personas infiltradas de los paramilitares y de las guerrillas... ¡Ah! Y también hay militares

<sup>27</sup> La operación "Orión" se realizó durante el año 2002, en la alcaldía de Luis Pérez y a principios del gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez. Esta acción desterró las estructuras guerrilleras y abrió más espacio a las organizaciones paramilitares en los barrios. En la operación participaron cientos de hombres del ejército y la policía nacional. En ella muchos civiles fueron desaparecidos de sus casas y asesinados por tiros de fusil en un enfrentamiento que duró varios días.

<sup>28</sup> Guillermo Cano, quien le da nombre al instituto, fue durante muchos años el director del periódico bogotano *El Espectador*; por su política de oposición y denuncia contra las acciones del narcotráfico fue asesinado en 1986, por órdenes del capo del Cartel de Medellín, Pablo Escobar; y de los narcos Evaristo Poiras y Gonzalo Rodríguez Gacha. Ver detalles en: <http://www.fundacionguillermocano.com/?p=135>.

invitados". En ese entonces, fue muy particular la demanda psicológica de los uniformados que asistieron al taller: decían que no podían dormir, por órdenes de sus superiores y de la presidencia; que desde el 2002 el plan de guerra contra la guerrilla era demasiado intenso; y se dolían porque no podían ver a sus familias y novias desde hacía más de un año; pero, sobre todo, se horrorizaban al ver cómo varios de sus compañeros se estaban suicidando.

Ese mismo año tomé el puesto de catedrático de psicología social en la Universidad de Antioquia, y trabajé como consultor, y por momentos coordinador, del Proyecto de Prevención Temprana de la Agresión, un modelo pedagógico, participativo e integral para profesores, padres de familia y niños en edad escolar, que a su vez hacían parte del Programa de Convivencia Ciudadana de la Alcaldía de Medellín.

Entre 2004 y 2006 la pasión (padecimiento de este acumulado de vivencias y aprendizajes) me llevó a expresar duras críticas desde la academia frente a las acciones de todos los actores armados; así puse en evidencia una posición no violenta, sin respaldo político alguno. En el 2004 elaboré la investigación titulada "La pasión por la aventura en el menor infractor", una lectura alternativa y diferencial, centrada en el reconocimiento de la existencia de un proyecto más allá de la norma y de la ley, que podía leerse no en los términos trascendentales y moralmente negativos que promovieron Alonso Salazar y Víctor Gaviria, sino en la clave de la inmanencia que constituía el acontecimiento, el viaje y la aventura del infractor. Desafortunadamente, por su tono contestatario, el Centro de Investigaciones de la Fundación Universitaria Luis Amigó vetó su publicación.

#### EL EXILIO NÓMADA: UNA FUENTE DE INVESTIGACIÓN

En el año 2003 tuve la oportunidad de realizar un ejercicio académico que transformó mi posición como académico y trabajador del campo social. Hasta entonces me había acercado al ámbito comunitario como psicólogo social tradicional, con un enfoque centrado en problemas específicos; específicos en el sentido restringido, de aislados o atomizados (problemas de vínculo), sin contexto histórico-político. Cuestiones como la situación de la paternidad de los varones en las comunidades de bajos ingresos de Medellín; el acompañamiento a jóvenes de bandas delictivas en su proceso de re-educación, orientados a la reconciliación y a su inclusión en labores empresariales; o el diseño de estrategias de prevención de la violencia para la misma ciudad, fueron experiencias mal localizadas desde mi formación como consejero social.

Esta nueva actividad, bajo dimensiones netamente académicas, era inusitada: debía revisar los informes publicados en la década de los noventa sobre violación a

los derechos humanos en Colombia, y en consecuencia producir un breve informe comparativo no solo sobre los datos allí expresados, sino sobre el modo como se concebían y orientaban. Pude observar los sutiles énfasis políticos y las omisiones en el lenguaje de los informes publicados por las Naciones Unidas (ACNUR), Amnistía Internacional, Human Rights Watch, y en los de las Fuerzas Militares de Colombia.

En perspectiva, considero que la labor que desempeñé fue menor o intermedia en tanto no coordinaba ni decidía nada en dicha investigación. Lo allí producido era un estudio complementario; pero los efectos de estos informes en mi sentido de vida fueron una intervención discursiva radical que cambió mi modo de ver la profesión que venía desempeñando y la percepción política que tenía de los actores y fenómenos del conflicto armado. Noté con indignación que los hechos de la guerra traducidos en datos sobre la realidad colombiana no solo eran desmesurados y sobrecogedores, sino motivadores de una profunda vergüenza.

Darme cuenta, por medio de estos trabajos, de los efectos del conflicto armado, incitó en mí la necesidad de realizar acciones desde la academia orientadas a la intervención social humana (no digo humanitaria ni humanista); acciones orientadas al apoyo de comunidades afectadas por las violencias de los distintos actores armados en Colombia. Así, como catedrático, vi la oportunidad de crear un grupo de voluntarios: el Grupo de Apoyo y Voluntariado Psicosocial (GAYVO).

Entre inicios de 2004 y mediados de 2006 participaron estudiantes de psicología y de otras disciplinas de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad de Antioquia, lo cual llevó a que el grupo creciera y desplegara actividades con personas de diversos barrios afectados por desplazamiento —especialmente con jóvenes y niños—, y acompañara a ancianos que habitaban las calles y a mujeres privadas de su libertad en la cárcel de la ciudad.

Pero ni las críticas desde la academia a los actores armados ni estas labores comunitarias serían bien vistas por miembros vinculados a los fenómenos de producción de la violencia, ni por los que se dicen o disfrazan en el centro-neutral como académicos tradicionales de escritorio. A mediados de 2006 esta toma individual de acciones político-académicas sobre el sufrimiento y los DDHH tendría como consecuencia una amenaza y el consecuente exilio.<sup>29</sup> Un doloroso, corto e intenso año de exilio nómada —fruto de las ya comunes amenazas en este país— que para mí no eran raras sino *familiares*. Este evento nómada me llevó por la ruta forzada de estadías breves en las que empecé en el Citibank mi nacimiento y

<sup>29</sup> A quienes me preguntan por qué no me fui tras anteriores amenazas, mi respuesta radica en considerar la política de la visibilidad de quien se pone y te pone en el lugar del enemigo. En este caso, la amenaza y su calumnia tenían firma pero no rostro; era una acción que no podía tener interlocución con el agente de origen ni interpellarlo.

precaria economía: Buenos Aires, Washington, New York, Montreal y, de retorno, Bogotá, en donde me articularía de nuevo a las causas trazadas en años anteriores, al acompañamiento a las víctimas de estas exacerbadas violencias.

Así, desde finales de 2007 inicié labores como asistente o investigador en diversos proyectos de recuperación de la memoria de las víctimas con el Área de Memoria Histórica (AMH) de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR). Este trabajo se realizó con las víctimas de diversas comunidades del país, con instituciones del Estado y algunas ONG, como la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). Muchas de estas acciones eran apoyadas principalmente por la Unión Europea, la USAID, y distintas embajadas como la canadiense y otras agencias humanitarias: desde su perspectiva, para producir un ajuste social; desde la nuestra, para producir un saber histórico sobre lo acontecido.

Mis trabajos iniciales en la “Cartografía de las Iniciativas de Memoria” y el reconocimiento de los “Esfuerzos de la sociedad civil, las ONG y las asociaciones de víctimas por preservar las memorias del conflicto de las víctimas”<sup>30</sup> en todo el país, y mi participación como psicólogo y asistente de investigación en los talleres de reconstrucción de los hechos de las masacres de Trujillo, Valle<sup>31</sup> y La Rochela, Santander<sup>32</sup>, más el apoyo metodológico a distintas organizaciones de víctimas como consultor del Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ), me permitieron el contacto con la vivencia de todas estas personas que luchan contra la impunidad, que buscan la justicia, el reconocimiento y la restauración de sus condiciones de vida por fuera de los marcos de la venganza.

En este corto periodo de tiempo vi cómo doña Esperanza quedó viuda tras una de las más de 2.500 masacres<sup>33</sup> datadas en el país, cometidas todas ellas entre 1980 y 2005. Su esposo, un joven trabajador de la justicia, fue asesinado en 1989, en la masacre de La Rochela, pero hasta el día de hoy ella sigue realizando tareas para la búsqueda de una justicia “completa” frente a lo sucedido, una justicia que vaya más allá del señalamiento de los autores materiales del crimen. Desde ese evento,

<sup>30</sup> Coordinados entre 2007 y 2008 por la antropóloga María Victoria Uribe, desde el Instituto Pensar de la Universidad Javeriana, para inscribirlos en la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR).

<sup>31</sup> Trabajo realizado para la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), a principios de 2008.

<sup>32</sup> Coordinado por el abogado y especialista en derechos humanos, Iván Orozco, desde la Universidad de los Andes en Bogotá, para la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR), entre 2009 y 2010.

<sup>33</sup> “Durante un informe que dio a conocer el Área de Memoria Histórica de la CNRR, se reveló que en los últimos veinte años han muerto más de 14 mil colombianos a raíz de las 2.500 masacres ocurridas en el país”. Ver <http://www.rcnradio.com/noticias/nacional/10-09-10/colombia-ha-sufrido-2-mil-500-masacres-en-los-ultimos-20-os>

doña Esperanza y las demás familias han pasado por diversas experiencias: se relacionaron con el sistema penal, con el sistema contencioso administrativo, con la justicia internacional, con disímiles instituciones de apoyo religioso y psicosocial, con organizaciones de víctimas, con los medios de comunicación y, en los últimos años, con las instituciones y procesos de reconstrucción de memoria.

Estas experiencias han transformado su modo de ser —y conocerlos, el mío—; sus posiciones frente al Estado, ante las organizaciones de víctimas, lo que puede denominarse sus elecciones y proyecto de vida, así como el proceso de interacción con los discursos de los expertos sobre su caso, han modificado su subjetividad. Si tras la experiencia de elaboración de un informe comparativo sobre los derechos humanos y un breve exilio nómada se transformó mi posición frente a lo que debía hacer como académico y trabajador del campo social, doña Esperanza no ha dejado de incorporar durante dos décadas enteras una serie de posiciones y transformaciones discursivas dentro de su vida.

Así, mi experiencia y la de doña Esperanza se articulan —reticulan— en torno a estos acontecimientos históricos y discursivos bajo la forma de preguntas. Estos son algunos de los condicionantes que han motivado el problema de investigación de este trabajo en el marco del periodo inicial de la llamada Justicia Transicional (JTR) y la consecuente pregunta: ¿cómo se producen, circulan, disputan y posicionan las prácticas de la memoria de las víctimas en la cultura política del país?

En efecto, la subjetividad de doña Esperanza no era la misma hace veinte años; hoy no solo debe afrontar los cambios propios del trazo del tiempo, sino que debe asimilar una serie de experiencias, de discursos y tratamientos que durante los últimos años se han ido constituyendo como una nueva subjetividad para ella y para cientos de miles de víctimas; consecuencias que consolidan modos de ser de la cultura política de las víctimas, de quienes las tratan y de la población frente a ellas.

Si el cuerpo racional del ciudadano es constituido, entre otras, por la política, como constitucionalidad de los Estados, por medio de todos los planes, programas, proyectos, métodos y tratamientos que buscan que sea una realidad el cuerpo de la ciudadanía, como deber y como derecho, el cuerpo de la *víctima*, su subjetividad social, lo componen un conglomerado de discursos y tratamientos que se han ido configurando con el fin de intervenir su subjetividad desde la justicia, la historia-memoria, lo psicosocial, lo religioso y los medios empresariales o monopolios de la comunicación; esto por mencionar solamente algunos de los agentes más visibles. Se ha creado, entonces, un dispositivo que intenta sujetar de nuevo a las víctimas a una cultura política formalizada, para intentar reparar los mismos daños surgidos del estado de excepción en el que fueron focalizadas, molidas y trituradas, y de ese modo realizar el ajuste social necesario para las demandas del progreso actual del país.

Los familiares de las víctimas no solo deben enfrentar la tragedia de lo sucedido, sino que afrontan su existencia de cara a una hidra discursiva en la que convergen todos los tratamientos para su situación: entre otros, los dispositivos judiciales, histórico-memóricos, psicosociales, religiosos y mediáticos; así como las ideas y representaciones sobre ellos, en sus diversas formas: las leyes, los procedimientos y requisitos para su atención, la implementación de métodos para el duelo o para fomentar el deber de memoria, las tecnologías de verdad, perdón y reconciliación, y su representación en los medios masivos de información; todos estos son algunos de los tratamientos e intervenciones con los cuales deben relacionarse.

En el escenario de la *episteme* de la *victimidad*, mi interés radica en 1) presentar una descripción propositiva sobre algunos de los discursos que configuran el olvido, la memoria y la historia como formas del pasado que intencionalmente dan un carácter y un lugar a las vivencias de las víctimas; y 2) problematizar el modo como el cuerpo discursivo de la memoria histórica —fruto de diversas formaciones y prácticas discursivas— ha venido interviniendo a las víctimas, especialmente durante los últimos cinco años de vigencia de la Ley de Justicia y Paz, entre 2005 y 2010, época en la que se incrementaron las intervenciones de los derechos humanos (DDHH), del Derecho Internacional Humanitario (DIH), de la Justicia Transicional (JTR) y, ahora, de la Corte Penal Internacional (CPI), en Colombia.

Como en este trabajo no podemos desarrollar lo que damos en llamar la *episteme* de la *victimidad*, entendida como esa confluencia de discursos y prácticas que construyen, inventan, politizan, posicionan y proyectan tipos de víctimas en los campos del poder y del saber, hacemos un acercamiento a la producción de la memoria de las víctimas solo bajo el recurso de la interdiscursividad de lo concreto, sentida aquí como una moderada crónica, en la que se articulan estas experiencias de trabajo en el campo de la memoria con los discursos, las prácticas y opiniones de la gente.

De esta manera, pondremos el centro de la reflexión en la producción de las memorias de las víctimas y su relación con el canon contemporáneo de la memoria de las víctimas, en tanto modo de producción de la historia y del pasado, de sus posiciones gubernativas u oficiales, agonistas, sub/alternas y reservadas; en las relaciones entre sus propias expresiones de memoria, de complementariedad o de diferencia; en la articulación con redes locales e internacionales y con procesos generacionales; en la posición ética de su apuesta, así como en las apuestas estéticas y los medios de circulación en que tramitan sus recuerdos.

En otros términos, entramos a describir cómo se dan las relaciones de poder en los diferentes niveles de producción del pasado, desde la perspectiva de las víctimas y de quienes las apoyan o se vinculan con ellas. Espero, pues, que esta crónica crítica del proceso que he llamado interdiscursividad de lo concreto informe y desacomode algunos acuerdos “naturales” y “de sentido común” que no son cuestionados en el

campo y el espectro de la producción de los recuerdos de la violencia, en el *boom* de las memorias de la Colombia del periodo entre los años 2005 y 2010.

Las alineadas amenazas e intimidaciones, confinamientos, huidas, desplazamientos internos y exilios que han pasado por este anudamiento testificante llamado “yo”, y que se volvieron “normales” entre la población colombiana, en una historia que no ha cesado de repetirse con diversos nombres y formas bajo el imperativo de la agresión y la aniquilación del semejante, cuando de diferencias políticas, sociales, económicas y militares se trata, son, entre otras, razones evidentes de mi interés por el tema. No veo más que una obvia ley de acción y reacción en el plano de la comprensión; in-cómodo con esto, trataré de encontrar un sentido que des-acomode en lo posible lo que se ha naturalizado en las prácticas de la memoria. Cuestionar y romper el tabú de no cuestionar crítica y propositivamente a quienes trabajan con las víctimas y a las mismas víctimas es ya, de por sí, una labor in-cómoda.

Para cerrar este capítulo inicial vuelvo, como en espiral, al eje del inicio. En medio de mi exilio nómada realicé un efímero regreso a Medellín, mi ciudad natal; entonces, mi padre no pudo evitar manifestar, con o sin conciencia de ello, aquello de lo cual él mismo es un producto histórico: al preguntarle qué pensaba sobre mi partida por las amenazas contra mi vida su respuesta tímida y precisa confirmó toda su historia: “¿Quién lo mandó a hablar”. Signo del modo de ser de gran parte de la cultura política y de la historia de millares de ciudadanos en Colombia.

Pero no quiero aquí hacer una alianza con las condiciones de los sin voz, de la subalternidad política en Medellín y Colombia, sino, por el momento, llamar la atención sobre cómo durante décadas mi padre participó de un *habitus* inconsciente y colectivamente aprendido: la memoria reservada: la ley del silencio en público y del habla restringida en privado; ley probablemente reforzada y aceptada en los últimos años por lo que en Colombia desde el 2002 se llamó el “programa de informantes”.

El habla en privado de los informantes, o el parlamento de los “sapos”, como son nombrados en la cultura popular colombiana, podía dar resultados para la guerra, pero a la par puso en evidencia las relaciones entre el habla y el silencio en el campo de lo íntimo, de lo privado y de lo público. Entre el silencio público y el habla privada e íntima parece que se juegan gran parte de las principales prácticas de la cultura política en Colombia, aspecto central de la corrupción (asaltar el fisco público en privado para intereses individuales) y de otros males correlativos a la cultura mafiosa (sobornos, compra de votos, etc.). A cambio, quien cruce la línea del habla, de lo privado a lo público, entra a vivir dentro de los factores de riesgo, entra a “merecer la muerte por sapo”. ¿Qué riesgos implica para las víctimas hacer memoria bajo estas condiciones? Quizá no podemos responder esta pregunta pero sí insinuar algunos de los caminos que deben recorrer.

Insisto, en mi adolescencia asistí a un sinnúmero de muertes y velorios, todos ellos de amigos y conocidos de barrio junto a los que crecí, jugamos fútbol en las calles, conversamos en las esquinas, tomamos refrescos o cervezas, nos dimos las primeras borracheras navideñas. Todos ellos cargados de sueños, unos más que otros vinculados al mundo del estudio y el empleo. Y me sigo preguntando algunas cosas que probablemente aquí no alcanzaré tampoco a elaborar. ¿Por qué a los jóvenes con los que crecí, a los que asesinaron, y a los mismos que me amenazaron no se les ha concebido como víctimas del conflicto social, político y armado? ¿Por qué en Colombia se escinde conflicto social, político y armado como si se tratara de dimensiones distintas de su realidad y no de continuidades sociopolíticas y económicas anudadas por problemáticas históricas acumuladas en la cultura política cotidiana?

Esta ha sido una de las dimensiones de mi vida, una en la que lo personal es histórico, en la medida en que nací y crecí bajo condiciones específicas, situadas y singulares de la ciudad de Medellín; y donde lo histórico es personal, en tanto puedo configurar y dar cuenta de estas memorias bajo el estilo en que se anuda este “yo” narrativo al surgimiento de los fenómenos del sicariato, el narcotráfico, la autodefensa popular, la guerrilla urbana y el paramilitarismo. Así, no por casualidad acepté mi labor, a veces como asistente de investigación o como investigador de campo, otras como psicólogo social y pedagogo, y ahora como crítico propositivo de los mecanismos de producción de la memoria de las víctimas.